

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

Por Ann Stodberg

Hasta hoy, Consejera y Jefa de la Cooperación Sueca en Honduras
Diario El Herald, 15 de abril de 2009

Hace dos años, el Instituto de Estudios Sociales (ISS) de La Haya, en el penúltimo de sus cinco estudios de seguimiento de las ERP latinoamericanas encomendados por la Cooperación Sueca, difundió su estudio intitulado “¿Qué pasó con la ERP?” Este estudio despertó mucha atención, y en algunos círculos incluso mucha irritación, a pesar de que no contenía información nueva o desconocida.

En realidad solo ponía en blanco y negro algunos datos que hasta ese momento no habían sido analizados sistemáticamente.

Vale la pena enfatizar que si bien la Cooperación Sueca no compartió todas las conclusiones del estudio, halló oportuna su difusión en aras de estimular el debate y la reflexión crítica. Irónicamente, en retrospectiva pareciera que el informe fue el inicio de la “Crónica de una muerte anunciada”.

En efecto, la ERP parece estar no solo muerta, sino bien enterrada en lo que a políticas de gobierno se refiere. Hace seis meses, ante la insistencia de diversos sectores de la sociedad hondureña, las autoridades gubernamentales prometieron presentar oficialmente una nueva versión actualizada de la ERP, que en un 90% había sido consensuada con la sociedad civil después de un largo y arduo proceso de consulta y debates.

Sin embargo, para sorpresa y decepción de muchos de los socios de este proceso, el gobierno desestimó el documento consensuado y en su lugar presentó a la Cooperación Internacional (no a la sociedad en general), un documento llamado “Bases Preliminares para un Plan Nacional de Desarrollo al 2030”, que “incorporaría” la ERP.

Es importante subrayar que aquí el tema no es el nombre del documento, sino su contenido. Posiblemente el gobierno, por razones desconocidas, encontró que la ERP ya no le servía el propósito original de ser un marco estratégico para combatir la pobreza.

La pregunta es ¿qué alternativa propone? Hasta el momento, tampoco se ha finalizado el Plan de Desarrollo y tampoco se ha presentado el presupuesto para el año en curso (finalmente es a través del presupuesto que podemos conocer las intenciones del combate a la pobreza).

Ya solo le quedan nueve meses para gobernar, en un año netamente político donde estos temas tienden a ser tratados más que nada para un propósito electoral.

De hecho, pareciera que en este momento no habría muchas posibilidades, en lo inmediato para continuar dando vida al propósito original de la ERP. ¿Qué consecuencias podría traer esta situación? Por una parte tiene implicaciones para la cooperación internacional.

En acuerdos internacionales para mejorar la eficacia de la ayuda como los pactados en París (2005) y recientemente en Accra (2008), se hace mucho hincapié en la “apropiación” o adueñamiento de parte de los gobiernos receptores de ayuda. No se trata de la entrega de cheques en blanco, sino de una nueva forma de cooperación más madura.

Los gobiernos receptores, a través de sus marcos estratégicos y efectivos para el combate a la pobreza, su manejo macroeconómico responsable y la aplicación de un estado de derecho, establecen la confianza necesaria para un apoyo presupuestario y programático que en su totalidad podría, en Honduras, llegar a superar los cien millones de dólares anuales por un período apreciable.

Este aporte a cualquier gobierno le facilitaría una programación y ejecución planificada de sus acciones para combatir la pobreza en forma eficiente.

Por otro lado, la sociedad civil y los gobiernos locales de los territorios más postergados del país, como el Occidente y La Mosquitia, reclaman y esperan el reestablecimiento de una ERP, llámese como se llame, para que se cumplan cabalmente aquellas transferencias descentralizadas e inversiones necesarias para bajar, y con el tiempo erradicar definitivamente la pobreza endémica de este país.